

Estigmatización y gestión neoliberal de la miseria. Por qué hablamos de pobreza y no de desigualdades¹

Albert Sales Campos

Coordinador del Área de Derechos Sociales y Políticas Públicas, Instituto Metròpoli, España  

<https://dx.doi.org/10.5209/redc.95063>

ES Resumen. En las sociedades post-industriales, la pobreza y la marginalidad ya no pueden considerarse fenómenos cíclicos o coyunturales. Las sucesivas crisis capitalistas han dejado tras de sí un crecimiento de las formas extremas de precariedad y una reacción de los Estados basada en la estigmatización y la criminalización de los grupos sociales que quedan sistemáticamente al margen de los beneficios del crecimiento económico.

A través de algunos ejemplos, este artículo parte del “descubrimiento de las clases marginadas” en la época de los Estados del bienestar y de la construcción de la pobreza como objeto de intervención de las políticas públicas socialdemócratas para adentrarse, a través de algunos ejemplos en los discursos estigmatizadores que justifican las medidas de gestión neoliberal de la miseria.

Palabras clave: pobreza; criminalización; estigma; desigualdades; servicios sociales; marginalidad.

EN Stigmatisation and neoliberal management of poverty. Why we talk about poverty and not about inequalities

EN Abstract. In post-industrial societies, poverty and marginality can no longer be seen as cyclical phenomena. Successive capitalist crises have left in their wake an increase in extreme forms of precariousness and a state response based on the stigmatisation and criminalisation of social groups systematically excluded from the benefits of economic growth.

Starting from the “discovery of the underclass” in the welfare state era and the construction of poverty as an object of intervention by social democratic public policies, this article examines the stigmatising discourses that justify the neoliberal management of poverty.

Keywords: poverty; criminalisation; stigma; inequalities; social services; marginality.

FR Stigmatisation et gestion néolibérale de la pauvreté. Pourquoi parlons-nous de pauvreté et non d'inégalités

FR Résumé. Dans les sociétés post-industrielles, la pauvreté et la marginalité ne peuvent plus être considérées comme des phénomènes cycliques ou conjoncturels. Les crises capitalistes successives ont laissé dans leur sillage une croissance des formes extrêmes de précarité et une réaction étatique basée sur la stigmatisation et la criminalisation des groupes sociaux qui sont systématiquement exclus des bénéfices de la croissance économique.

Partant de la «découverte de l'underclass» à l'époque de l'Etat-providence et de la construction de la pauvreté comme objet d'intervention des politiques publiques sociales-démocrates, cet article explore, à partir de quelques exemples, les discours stigmatisants qui justifient la gestion néolibérale de la pauvreté.

Mots-clés: pauvreté; criminalisation; stigmatisation; inégalités; services sociaux; marginalité.

¹ Artículo invitado

Sumario: 1. Introducción. 2. Los Estados del bienestar y la clase marginada. 3. Neoliberalismo, empobrecimiento y estigma. 4. La mitología criminalizadora: aprovechadas malas madres. 5. Vagabundos, vagos y maleantes. 6. Buscando al buen pobre: merecimiento y empleo. 7. Las migraciones en el entramado de la gestión neoliberal de la miseria. 8. Conclusiones. 9. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Sales Campos, A. (2024): “Estigmatización y gestión neoliberal de la miseria. Por qué hablamos de pobreza y no de desigualdades”, *Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC)*, 51(1), pp. 2-12

1. Introducción

El 30 de noviembre de 2021, de madrugada, dos personas adultas y dos niños murieron en un incendio en el espacio en el que residían en la plaza Tetuán de Barcelona (Blanchar y Catà-Fíguls, 2021). La familia llevaba más de un año viviendo en un local comercial abandonado propiedad de una entidad bancaria. La tragedia causó revuelo mediático y un fuerte impacto en el vecindario y entre la ciudadanía en general. Se publicaron artículos que explicaban que los niños estaban escolarizados y que los servicios sociales, conocedores del caso desde hacía más de un año, se habían asegurado de que recibían los cuidados apropiados. También se explicó que técnicos municipales habían inspeccionado el local para evaluar posibles riesgos y no habían encontrado problemas estructurales que pudieran motivar el desalojo si la propiedad no presentaba una denuncia.

Posteriormente, las investigaciones revelaron que la familia había pagado 700 euros por “la llave” del inmueble a una mafia especializada en facilitar ocupaciones a personas que no tienen posibilidad de acceder al mercado inmobiliario para procurarse una solución residencial. El círculo vicioso que impide a las personas extranjeras obtener permisos de residencia y de trabajo, la exclusión permanente del mercado de trabajo regular y la consecuente imposibilidad de acceder a una vivienda sólo fueron mencionados tangencialmente en algunos medios.

En todas las grandes ciudades del mundo crece el número de personas que no pueden acceder a una vivienda, con o sin empleo, con o sin permisos de trabajo y residencia. El número de personas sin hogar en la UE no ha dejado de crecer en los últimos 20 años hasta alcanzar las 895.000 personas de las últimas estimaciones disponibles (Horvat y Coupechoux, 2023). La propiedad inmobiliaria es uno de los principales ejes de desigualdad y el mercado de vivienda un mecanismo de explotación y desposesión. Incluso frente a este tipo de tragedias, el marco a través del cual nos aproximamos a la pobreza nos limita a imaginar soluciones individuales: papeles, trabajo, ingresos e inserción. Pero la tragedia de la plaza Tetuán es la expresión de las profundas y crecientes desigualdades sobre las que se sustenta, cada vez con más dificultades, el capitalismo global. Imaginar el fin de la miseria requiere plantear el reconocimiento del derecho a la subsistencia digna fuera de los mercados (en especial del laboral y del inmobiliario) y ese camino no se anda con “políticas para pobres”.

Píldoras de realidad como la noticia que abre este artículo, como las imágenes de personas sin techo al lado de oficinas u hoteles de lujo, o las fotografías de chabolas con el skyline de una gran ciudad de fondo, dan cuenta de que la pobreza extrema no es invisible. El crecimiento de formas de pobreza como el sinhogarismo puede llenar titulares de prensa, pero la visibilidad no tiene porqué traducirse en comprensión, empatía o voluntad política de incidir sobre sus causas estructurales.

Aunque las sucesivas crisis invitarían a explicar la pobreza a partir de sus causas estructurales, los discursos que hoy articulan los debates públicos tienden a poner el foco en sus formas más duras e impactantes y a relacionarla con situaciones de marginalidad y comportamientos desviados. Los relatos estigmatizadores facilitan la justificación de políticas disciplinadoras y represivas hacia las clases marginadas. Al mismo tiempo, la construcción del individuo pobre como objeto de intervención social alimenta la creencia de que los problemas relacionados con la marginalidad pueden resolverse aplicando el tratamiento adecuado. Este artículo repasa la genealogía de la estigmatización de la pobreza y algunos ejemplos de los discursos que justifican las políticas asociadas al giro neoliberal de las últimas cuatro décadas para concluir con algunas reflexiones acerca de la construcción de relatos alternativos centrados en la reducción de las desigualdades.

2. Los Estados del bienestar y la clase marginada

Décadas de crecimiento económico y de expansión de los Estados del bienestar generaron en Europa y Norteamérica una preocupación por la pobreza que se resistía a desaparecer que Zygmunt Bauman llegó a denominar el descubrimiento de las “clases marginadas” (Bauman, 2000; 103). En los años 50, 60 y 70 del siglo XX, se constata la persistencia de grupos sociales que quedan excluidos de los beneficios del progreso económico y social. Cuando el Estado benefactor se presenta como un proyecto de unas amplias clases medias que simbolizan un estilo de vida mayoritario, compartido y deseable, la pobreza se convierte en un fenómeno social anormal. En las sociedades del bienestar, del consumo y del pleno empleo, “ser pobre” consistía, ante todo, en no tener ingresos ni trabajo en el mercado laboral. Con tasas de desempleo cercanas a cero resultaba sencillo atribuir la pobreza a la vagancia y la inadaptación social. Para unas clases trabajadoras identificadas con las políticas socialdemócratas y con la ética del trabajo industrial, era política y emocionalmente cómodo aceptar que la pobreza era resultado de comportamientos desviados, construyendo una alteridad en “el pobre” que, en las ciudades fordistas, se encarna en el habitante de barrio marginal o en el vagabundo sin hogar.

El consenso alrededor de las políticas sociales de inspiración keynesiana y el contexto de abundancia de recursos contribuyó a que los debates académicos y políticos tendieran a centrarse más en las características de los individuos en situación de pobreza que en las causas estructurales de la marginación de personas y colectivos que acumulaban múltiples factores de exclusión (Gans, 1990). Las lagunas de protección de los hogares monoparentales o de las familias no normativas, la discriminación racial o la falta de apoyo a las personas con problemas de salud mental, quedaron en segundo plano detrás de la centralidad de las características individuales y de los comportamientos desviados que debían ser estudiados y convertidos en objeto de control. La responsabilidad de ejercer este control se depositaba en programas de asistencia social que tenían como objetivo la inserción socio-laboral o, en segunda instancia, en los cuerpos de seguridad y el sistema penal.

Parecería razonable que la expansión de riesgos sociales y de la precariedad en las sociedades occidentales a partir de los 70 y los 80 erosionará esta relación de la pobreza con características, comportamientos o problemas individuales. Sin embargo, los ataques neoliberales a las políticas sociales beben de esta consideración de la pobreza como fracaso individual y desviación moral alimentada por el paternalismo estatal.

3. Neoliberalismo, empobrecimiento y estigma

El final del régimen "fordista-keynesiano" desencadena un incremento de la población en situación de pobreza que ya no puede considerarse coyuntural o cíclico. Loïc Wacquant (2007) se refiere a las nuevas bolsas de miseria urbana como *marginalidad avanzada* y señala que son fruto del divorcio entre la evolución de los indicadores macroeconómicos y las condiciones de vida de las personas atrapadas en situaciones que considera producto de la desregulación capitalista. Frente a la constatación de que la expansión de esta marginalidad avanzada no depende de los ciclos económicos, el estado neoliberal reacciona a los problemas sociales a través de un renovado impulso de los mecanismos de estigmatización y de represión de la pobreza. Por un lado, se impone lo que se ha denominado la perspectiva del "workfare" en el diseño de prestaciones y servicios dirigidos a la población en situación de pobreza: de forma aparentemente paradójica, en medio de un sensible aumento de las tasas de desempleo que se produce en toda Europa durante los 80 y los 90, se generaliza el condicionamiento de las transferencias públicas a personas y familias en situación de pobreza a la búsqueda activa de empleo y la aceptación de cualquier oferta de incorporación al mercado laboral que pueda suponer la obtención de ingresos (Besley y Coate, 1992; Wacquant, 2010). Por otro lado, se extiende la criminalización de las actividades asociadas a la economía irregular de subsistencia y la utilización del sistema penal como herramienta de contención de los conflictos sociales y de sumisión a los empleos inestables y mal remunerados del proletariado de servicios (Wacquant, 2010; Garland, 2005).

La exaltación de la diferencia entre los "nuevos pobres" y los "marginados" recupera la preocupación por el desperdicio de los recursos públicos en tiempos de escasez, culpando a las personas de barrios estigmatizados, las minorías étnicas e inmigrantes, los pequeños delincuentes, las personas que ejercen la prostitución en la calle, las personas sin hogar o las drogodependientes, de ser un pozo sin fondo para los menguados presupuestos sociales de las administraciones. Mientras que la nueva pobreza generada por las reconversiones industriales y el desempleo, en cambio, se considera merecedora de transferencias públicas en la medida en que se esfuerce por formarse, reinventarse y volver a ocupar un lugar en el mercado de trabajo, las "clases marginadas" se consideran un problema de dimensiones crecientes alimentado por las políticas de bienestar de las décadas anteriores (Garland, 2005).

El giro neoliberal reactiva la necesidad de distinguir entre la pobreza merecedora de asistencia social y la pobreza no merecedora o indigna. Convertirse en merecedor pasa por demostrar que se es suficientemente pobre como para recibir ayudas y en que se es buen pobre (que una o uno se esfuerza lo suficiente para obtener ingresos a través del empleo). La individualización de las causas de la pobreza forjada durante la larga etapa de políticas de bienestar contribuye con más vigor que nunca a desplazar la raíz estructural de la misma.

La llamada crisis de las hipotecas de 2008 constituye un claro ejemplo de que la relación con la economía de las elites y de la población con empleos estables y bien remunerados discurre por caminos muy distintos a la de los grupos de población de rentas bajas. Después del estallido de la crisis y de la posterior recesión, los países europeos tardaron entre seis y nueve años en recuperar el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de 2007. Cuando se dejaron entrever los esperados "brotes verdes", el optimismo de los inversores y del mundo de los negocios contrastaba con la situación de pobreza en que habían quedado anclados los sectores de población más empobrecidos. Según el informe FOESSA de 2019, el número de personas en situación de exclusión social en ese momento (anterior a la pandemia global y a su efecto en la economía) era de 8,5 millones de personas; 1,2 millones más que en 2007. Los autores del informe alertaban que un tercio de la población española vivía en una situación crónica de inseguridad económica y que su resiliencia frente a nuevas crisis era mínima (Maíllo, 2019).

A pesar lo evidente que resultó para la opinión pública el carácter estructural de la crisis y de la labor de los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda por denunciar las raíces del alud de desahucios que desencadenó, los discursos estigmatizadores e individualizadores no sólo no han remitido en la última década y media sino que se han reforzado justificando los ejes fundamentales de las políticas neoliberales de gestión de la marginalidad: la criminalización, la represión y la persecución administrativa y penal de las clases marginadas, la sumisión al trabajo precario y la delegación de responsabilidades del sector público en el llamado Tercer Sector Social (Sales, 2014).

4. La mitología criminalizadora: aprovechadas malas madres

En 1976, Ronald Reagan estaba en su campaña para disputarle a Gerald Ford la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos de América. En enero, en un estrado de Asheville, Carolina del Norte, el aspirante afirmó: “En Chicago, encontraron a una mujer que tiene el récord. Usó 80 nombres, 30 direcciones, 15 números de teléfono para recolectar cupones de alimentos, Seguro Social, prestaciones de veteranos para cuatro esposos fallecidos inexistentes, así como transferencias para la asistencia social”. Reagan mencionó esta historia en sus discursos en repetidas ocasiones durante los siguientes años para ilustrar la necesidad de controlar y reducir las prestaciones asociadas a los programas sociales que consideraba que promovían la vagancia a costa de los impuestos de los contribuyentes (Levin, 2019).

Detrás de la anécdota hábilmente utilizada por Reagan y su equipo para apelar a los valores del esfuerzo y el mérito social, se esconde un caso real, el de Linda Taylor, una mujer arrestada por fraude en 1974 que, efectivamente, utilizó mil y una argucias para sustraer de las arcas públicas grandes sumas de dinero. El caso de Taylor sirvió para consolidar el mito de las “*welfare queen*”: mujeres afroamericanas que viven de las ayudas sociales, sin empleo y sin intención de buscarlo, que tienen hijos para hacerse con más ayudas a los que no cuidan adecuadamente y a los que transmiten su gusto por el parasitismo social. Aunque Josh Levin, autor de una reciente biografía de Taylor, afirma que su vida y sus estrategias se asemejan más a las de una estafadora de alto nivel que a las de cualquier perceptora de ayudas sociales, el caso se convirtió en categoría y alimentó la predisposición contra las ayudas sociales a la población de los barrios marginados de mayoría negra.

Sin ir demasiado lejos, en agosto de 2011, el primer Gobierno de Artur Mas en la Generalitat de Catalunya utilizó un discurso similar para justificar la reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI) que dejó fuera de esta prestación a muchas familias. Un conseller llegó a manifestar en rueda de prensa que habían detectado que algunos hogares estaban suscritos a televisión de pago. El éxito de los discursos neoliberales sobre la pobreza se debe en gran parte a que están fundamentados en prejuicios compartidos por amplias mayorías sociales que se identifican con los valores de las “clases medias”. Asumir que las personas en situación de pobreza no saben administrar sus vidas y someterlas a una sospecha permanente de parasitismo forma parte del sentido común compartido por las personas que gozan de una posición económica y social bienestante y por aquellas que viven mal más que bien de un salario.

Estos prejuicios no sólo han justificado y justifican decisiones políticas antisociales, sino que también guían políticas públicas y actividades caritativas. Durante algunos años, se reeditó anualmente en todo el territorio español una campaña de captación de fondos llamada “Ningún niño sin bigote”. Se trataba de una acción de recogida de donativos económicos con el objetivo de que los Bancos de los Alimentos y la fundación bancaria Obra Social de La Caixa pudieran adquirir leche para hacerla llegar a los niños y niñas de familias sin recursos. En 2015, fecha de su lanzamiento, y en años posteriores, se apelaba a caras populares, así como al público general a compartir en sus redes sociales una fotografía con el “bigote” blanco que deja la leche acompañada de la etiqueta #ningunniñosinbigote. Esta acción, que disfrutó de bastante éxito entre personajes populares de la cultura y el deporte, servía para promocionar la campaña, así como para realizar una demostración individual de sensibilidad y buena voluntad.

En su lanzamiento, la web de la campaña dedicaba un espacio a explicar la importancia de la buena nutrición para el desarrollo de la infancia y el relevante papel de la leche como alimento básico. Lo que no explicita la web es porque las familias beneficiarias deberían preferir recibir leche que el dinero para comprarla. Si la preocupación es la buena nutrición de las niñas y niños de familias empobrecidas, ¿por qué no transferir las donaciones en efectivo? Quizá esos padres y madres preferirían seguir acudiendo a las tiendas para comprar leche, pasta, legumbres o aquello que consideren más apropiado según sus gustos, prioridades o preferencias culturales.

El empeño por sostener una estructura logística para llevar cartones y botellas de leche a las niñas y niños “pobres” adquirida con dinero de donantes particulares e institucionales debe tener muchas justificaciones, pero existe una causa que sin duda es relevante: la falta de confianza en que las personas adultas destinen el dinero recibido de las organizaciones sociales en el bienestar de sus hijos e hijas. Una falta de confianza asentada en la creencia de que los valores de padres y madres sin ingresos económicos son distintos de los que orientan las paternidades y maternidades de quienes impulsan la campaña. Se trata de personas incapaces de administrarse correctamente o vagas y aprovechadas. O quizá reúnan todas estas características al mismo tiempo.

5. Vagabundos, vagos y maleantes

La construcción de estereotipos alrededor de la pobreza extrema que persiste en las sociedades opulentas entre los años 80 y los 2000 bebe de la individualización de los problemas sociales. En los 90, el primer crecimiento cuantitativamente relevante de personas sin techo en las ciudades occidentales desde la Segunda Guerra Mundial impulsó que una parte de la investigación social se interesara por definir las características propias de los sujetos que dormían en la calle (Toro et al., 2007). Los estudios que caracterizaban a la persona sin hogar como hombre de mediana edad con problemas de alcoholismo y de salud mental contribuyeron a crear un estereotipo que todavía reproducen los medios de comunicación ávidos de visiones simplificadas de la realidad. Aunque la realidad de la exclusión residencial grave se ha extendido y transformado rápidamente en las últimas décadas, se siguen reproduciendo estereotipos que vinculan el sinhogarismo con adicciones, estilos de vida poco convencionales o marginales, incapacidad de sostener un empleo, poca voluntad de trabajar y actividades cercanas a la delincuencia.

Este estereotipo cumple dos funciones esenciales: por un lado, permite a la ciudadanía de vida “normalizada” mantener la certeza de que, por mal que vayan las cosas, nadie es víctima de las formas más extremas de pobreza urbana si no mantiene vicios, comportamientos desviados o sigue una genérica “mala vida”. Por el otro, la culpabilización de la víctima siempre resulta un modo eficaz de romper vínculos morales. Uno no se puede responsabilizar de la suerte de quién se ha labrado su mala situación y, en caso de tomar medidas, lo hace por compasión.

Identificar a las personas que viven la pobreza como desviadas con comportamientos distintos a los propios es el primer eslabón de la escalera de la aporofobia. El tratamiento mediático de la miseria contribuye a esta diferenciación. El sinhogarismo constituye un ejemplo paradigmático de perpetuación de estereotipos a través de discursos aparentemente contrapuestos: buena parte de los artículos, crónicas y reportajes referidos al sinhogarismo adoptan el discurso del fracaso individual y presentan a la persona sin techo como alguien que vive las consecuencias de sus malas decisiones, de su falta de compromiso con el trabajo o de sus vicios y adicciones. A menudo, aunque no siempre, este discurso aparece combinado con un discurso de rechazo que presenta la persona en situación de pobreza extrema como una molestia para una comunidad o un vecindario, poniendo en el centro de la narrativa aquellas actitudes que generan un impacto negativo en la gente “normal” cuya vida se ve afectada negativamente por la presencia de personas sin techo cerca de sus hogares. En estos textos y productos audiovisuales se habla de indigentes que tienen comportamientos antihigiénicos o peligrosos, se suele poner énfasis en la suciedad o las peleas para justificar una demanda de actuación de una autoridad frente a un agravio hacia la ciudad y sus gentes. Los agraviados que suelen aparecer como voces autorizadas en los reportajes son vecinos, pero sobre todo comerciantes que afirman que su actividad económica se ve perjudicada.

La contestación al discurso del rechazo suele estar protagonizada por entidades sociales que atienden a personas sin techo. Ya sea a través de sus propios productos audiovisuales y escritos, o participando en piezas informativas como voz experta, las ONGs contribuyen a configurar la imagen de las personas sin hogar y a condicionar la opinión pública acerca de las vías de solución a sus problemas. El tono y la orientación de los mensajes públicos de las entidades depende en gran medida de la necesidad de captar la atención sobre su causa a ciudadanas y ciudadanos que se sientan conmovidos por historias personales y que, convencidos de la buena labor de la organización, se impliquen o realicen aportaciones económicas. Por un lado, este discurso acaba sobrevalorando la capacidad de las actividades solidarias para solucionar los problemas sociales. Por el otro, contribuye a la disociación de intereses entre la población “normalizada” a la que se dirigen las acciones comunicativas y la población atendida a la que se representa como víctima del infortunio, o incluso de sus malas decisiones, pero que merece compasión (Serrano y Zurdo, 2013).

Los discursos acerca de las formas extremas de pobreza basculan entre el rechazo y la compasión sin abandonar la división entre la población “normalizada” y la población marginalizada, olvidando que el sinhogarismo es la expresión extrema de la exclusión del mercado de la vivienda, de la precariedad laboral, de la falta de protección social y de las leyes migratorias (Sales, 2022b; Horvat y Coupechoux, 2023). Resulta difícil hacer frente a los discursos de odio y rechazo sin romper con la alterización de esta amalgama de gentes en situaciones extremas que son “los pobres”.

6. Buscando al buen pobre: merecimiento y empleo

El rechazo y la compasión pueden ser dos caras de la misma moneda. Afirmaciones como “los pobres son manirroto que no saben administrar el dinero”, “mejor dar comida que dinero para evitar que se lo gasten en drogas o alcohol”, “la pobreza lleva a la delincuencia” o “los pobres no necesitan ayudas sino un empleo” se pueden sostener simultáneamente desde la aporofobia o desde la caridad. De hecho, la intervención social con personas en situaciones de marginalidad tiende a crear herramientas de control que garanticen que los y las perceptores de ayudas sociales (públicas o de entidades no lucrativas) sean merecedoras de las mismas y destinen el dinero recibido a unas necesidades predefinidas por profesionales especializados.

Las instituciones que ayudan a las personas en situación de pobreza a cubrir sus necesidades ejercen de administradoras de la escasez. El debilitamiento de los sistemas de protección social, la precarización del empleo, la reducción de la capacidad adquisitiva de los hogares de rentas bajas y el incremento de los precios de la vivienda condicionan profundamente los debates sobre el sentido y las funciones de los servicios sociales. Mientras, colectivos profesionales (trabajadoras/es y educadoras/es sociales) y voces expertas en el ámbito de las políticas públicas plantean la necesidad de que la acción social se concentre en promover el tejido comunitario y en garantizar las redes de cuidados, la principal actividad de las oficinas de servicios sociales sigue siendo administrar ayudas de emergencia, cubrir necesidades básicas de personas y hogares empobrecidos y hacer frente a una crisis sin fin de vivienda (Sales, 2022a).

En este contexto de escasez de recursos, organizaciones de la sociedad civil y servicios sociales públicos deben dirimir si “los pobres” son merecedores o no de su ayuda. Para acceder a prestaciones, ayudas económicas de emergencia o lotes de alimentos, las personas y las familias deben someterse al escrutinio de quien decide si existe realmente una necesidad que cubrir y si se están llevando a cabo los esfuerzos necesarios para salir de su situación. En la actual gestión de la pobreza siguen vigentes los debates sobre las funciones del trabajo social en lo relativo a diferenciar entre pobres merecedores y pobres no merecedores de ayudas que marcaron el desarrollo de las sociedades de beneficencia del siglo XIX (Verde-Diego, 2022).

Las formas en que el imaginario de la “gente de bien” ayuda a construir la figura de “los pobres” sospechosos de aprovecharse de las ayudas es una forma de violencia simbólica clasista que orienta las políticas públicas. Los que no sufren la pobreza en su día a día viven convencidos de que en caso de caer

en desgracia encontrarían mejores formas de administrarse que la vecina del tercero que va a servicios sociales, pero acaba de comprarse un nuevo teléfono. Aun siendo conscientes de la magnitud de las crisis que nos golpean, en conversaciones familiares o entre vecinos se sigue comentando que tal familia viviría mejor si no gastara tanto dinero en comida basura o si no compraría cosas innecesarias por una conocida plataforma online. Cualquier pequeño lujo es susceptible de escrutinio porque no sólo hay que ser pobre, es imprescindible parecer pobre.

Los mecanismos de protección social también están sujetos a una valoración de merecimiento íntimamente ligada al mercado laboral. Recibir recursos significa demostrar constantemente la carencia, la voluntad de buscar empleo o la incapacidad para trabajar. Aunque la precariedad laboral se extienda y noticias acerca de las estadísticas de “trabajadores pobres” aparecen recurrentemente en los medios de comunicación, la fe en el empleo como mecanismo de integración social sigue alimentando las resistencias a políticas de garantía de rentas o al reconocimiento de derechos desligados del mercado laboral. Está socialmente aceptado que una persona de 70 años reciba una prestación por jubilación que le permita mantener un nivel de consumo relativamente confortable siempre que haya cotizado durante toda una vida laboral. Pero al mismo tiempo, se acepta que una persona cuyo trabajo no haya generado esa cotización –una mujer dedicada toda la vida a tareas de cuidados o un peón agrario, por ejemplo– malviva durante su vejez de una pensión no contributiva.

Este sistema de creencias y valores asentado sobre la centralidad del mercado laboral justifica que las transferencias sociales se condicionen a la búsqueda activa de empleo. El “workfare” actúa como herramienta de sumisión al trabajo precario de los sectores más empobrecidos de la población. La evidencia empírica sugiere que, si el objetivo de las políticas públicas fuera la protección social, deberíamos avanzar hacia sistemas de garantía de ingresos desvinculados de las posiciones de las personas en el mercado laboral (Offe, 2008). Habida cuenta que el mérito y el esfuerzo poco tiene que ver con los ingresos o el patrimonio, la justicia social no puede descansar sobre la remuneración del trabajo asalariado.

7. Las migraciones en el entramado de la gestión neoliberal de la miseria.

El aumento del número de residentes extranjeros en los países occidentales ha reconfigurado los mecanismos de gestión de la pobreza. Mientras que a principios del siglo XX las migraciones internacionales estaban protagonizadas por población europea, en estas primeras décadas del siglo XXI el continente europeo es el principal receptor de flujos migratorios. En Europa vivían 86,7 millones de residentes extranjeros en 2021, casi 30 millones más que en el año 2000. Aunque los migrantes internacionales constituyen solamente un 3,6% de la población mundial, la cuestión migratoria se ha situado en el centro del debate político y mediático en los países del Norte Global que, en términos relativos, son los que registran tasas de población extranjera residente más altas (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021). En 2022, la población extranjera residente en España ha alcanzado los cinco millones y medio de personas según la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra consolida la recuperación del ritmo de crecimiento que se vio interrumpido entre 2008 y 2018 por la crisis económica (Mahía, 2018) y confirma que los flujos migratorios dependen en mayor medida de dinámicas económicas que de las crecientes restricciones legales.

No todas las personas extranjeras residentes en países europeos tienen la misma consideración. En los debates públicos y políticos, una parte de la población migrante es considerada una carga real o potencial para los sistemas de protección social y las arcas públicas, mientras que otra parte es recibida como talento de importación o consumidores de alto nivel adquisitivo. Un peón de la construcción originario de Marruecos, una trabajadora del hogar de nacionalidad ecuatoriana o un jornalero senegalés son denominados en España inmigrantes, una ingeniera alemana, un publicista estadounidense o una cirujana de Canadá son considerados “expats” (concepto utilizado, precisamente, para diferenciar las personas migrantes en función de su origen geográfico y de clase social).

En Barcelona, como en otras muchas ciudades europeas, los discursos y las actitudes de rechazo hacia comunidades migrantes conviven con la celebración de la proyección global de la ciudad y la exaltación de su atractivo para “expats” venidos de todo el mundo. Cada año, el propio Ayuntamiento promueve el *Barcelona International Community Day* mientras que, en paralelo, la entidad *Barcelona Global* publica el estudio *International Talent Monitor* con el patrocinio de una entidad bancaria para saber más de esta parte de la población extranjera residente en la ciudad y conocer su valoración sobre multitud de aspectos de su calidad de vida en la capital catalana (Castán, 2023). Se hace difícil imaginar eventos de características similares para dar la bienvenida, por ejemplo, a cuidadoras familiares de Perú, Bolivia o Ecuador, a pesar de que son un pilar fundamental de la economía de los cuidados.

Se normaliza la movilidad internacional de personas de rentas altas, pero en el espacio mediático y político los debates acerca de la inmigración se centran en los residentes extranjeros que identificamos como “inmigrantes”. Bajo esta etiqueta situamos únicamente a las personas que se instalan en territorio europeo para mejorar su vida procedentes de países y situaciones peores que las que se puedan encontrar en el país al que llegan (o que son así percibidas por la población local). Las sociedades europeas proyectan sobre el inmigrante la voluntad de mejorar su situación económica y/o la de huir de la pobreza, de conflictos armados o de desastres naturales. En el imaginario colectivo, la etiqueta de inmigrante equivale a la de pobre en la medida en que se pone en el centro de la discusión el gasto público en programas sociales y prestaciones económicas.

Los discursos que problematizan las migraciones y los que problematizan la pobreza tienen en común la necesidad de distinguir entre “merecedores” y “no merecedores” de asistencia social. En la primera

categoría se sitúan aquellos que deberían ser bienvenidos porque huyen de guerras, persecuciones y desastres. Aunque la falta de voluntad de facilitar protección y asilo es cada vez más evidente, la mayoría de la población de los países occidentales todavía avala su estancia, al menos mientras no mejora la situación en el país de origen. Los inmigrantes “no merecedores” serían aquellos que se instalan en países ricos buscando “solamente” mejorar su vida y su economía (Pinzani, 2020).

Reportajes, artículos e investigaciones alertan de la necesidad de incorporar trabajadoras y trabajadores migrantes a una estructura laboral cada vez más envejecida mientras se evidencia que están ocupando los puestos de trabajo de los sectores más precarizados de las economías europeas (Mahía y Medina, 2021). Sin embargo, los discursos de rechazo contra la inmigración arremeten contra quienes supuestamente colapsan los servicios sociales, reciben las ayudas sociales y “se aprovechan” de la supuesta generosidad de los mecanismos de protección social. No hay duda de que el propio proceso migratorio supone asumir riesgos relacionados con dejar atrás las redes de apoyo social y familiar al mismo tiempo que se asumen condiciones laborales precarias. Pero la inmensa mayoría de las personas migrantes residen en los países europeos sin necesitar ningún tipo de transferencia pública.

De hecho, la población extranjera residente no está sobrerrepresentada entre los perceptores de subsidios y prestaciones vinculados a cotizaciones a la seguridad social, pero sí entre las usuarias y usuarios de servicios sociales (que actúan como red última de garantía de necesidades básicas). También es evidente que la población migrante (y racializada) es mayoritaria en dispositivos como repartos de lotes de alimentos o albergues para personas sin hogar de nuestras ciudades (Sales, 2019). Mientras el discurso del rechazo atribuye esta presencia a la ociosidad y la voluntad de la población migrante de aprovecharse de la generosidad de las políticas sociales, la realidad es que las personas que están en la cola de un reparto de alimentos están excluidas de los mecanismos de la mayor parte de mecanismos de protección social.

8. Conclusiones

En las sociedades occidentales, las contrarreformas neoliberales han roto la conexión entre el crecimiento económico y el bienestar material para segmentos cada vez más extensos de la población, generando dinámicas de marginación y segregación territorial de sectores de rentas bajas cada vez más amplios. Desde los años 80, los Estados han reaccionado desplegando distintas versiones de un modelo de gestión de la pobreza basado en vincular cada vez más las ayudas sociales a la sumisión al empleo precario, en estigmatizar y criminalizar a los sectores de población empobrecidos justificando intervenciones policiales y penales en barrios segregados y sobre grupos tradicionalmente marginados, y en delegar la responsabilidad pública en materia de protección y asistencia social en la sociedad civil y la filantropía.

Este modelo se alimenta de discursos estigmatizadores basados en imágenes estereotipadas de las personas que sufren las formas más duras de exclusión social. En la mitología criminalizadora encontramos mujeres que tienen hijos para poder vivir de las ayudas sociales, hombres que jamás han querido trabajar y pagan su mala predisposición al esfuerzo viviendo en las calles como vagabundos, personas que se involucran en actividades delictivas para sufragar sus adicciones y acaban tocando las puertas de los albergues para “sin techo”. Estas imágenes se construyen en el marco de las “sociedades del bienestar” de la parte central del siglo XX, pero se reproducen y amplifican a partir de los años 80.

A pesar del éxito y la aceptación de los discursos neoliberales sobre la pobreza, “ayudar a los pobres” sigue generando un importante consenso social. El contrapunto a los discursos de rechazo o criminalización suele alimentarse de argumentos compasivos y de la reivindicación de soluciones focalizadas en los sectores de población afectados por situaciones especialmente graves. Pero plantear las diferentes expresiones de la pobreza como problemas sociales fácilmente delimitables y desconectados de los mecanismos de generación de las desigualdades no sólo es compatible con la gestión neoliberal de la pobreza, sino que resulta perfectamente funcional en el marco de esta gestión neoliberal de la miseria.

El 30 de noviembre de 2021 los medios de comunicación barceloneses se hicieron eco del drama de una familia que murió calcinada en el local abandonado que ocupaba ilegalmente. Se habló de pobreza y de sinhogarismo, se cuestionó el papel de los servicios sociales, y se expresó indignación por el hecho que un número indeterminado de familias –mayoritariamente migrantes– vivieran en situaciones similares en la ciudad y su área metropolitana. Pero exigir soluciones para las personas sin hogar a través de políticas concretas de atención social sin incidir en las políticas migratorias, en la estructura de propiedad de los parques de vivienda y en la regulación de los arrendamientos tiene un alcance muy limitado. Hablar de pobreza sin hablar de desigualdades tiene un alcance muy limitado.

9. Referencias bibliográficas

- Bauman, Z. (2000): *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*, Barcelona, Gedisa.
- Besley, T., y Coate, S. (1992): “Workfare versus welfare: Incentive arguments for work requirements in poverty-alleviation programs”, *The American Economic Review*, 82(1), pp. 249-261. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/2117613>
- Blanchar, Cy Catà-Figuls, J. (2021): “Una pareja y sus dos niños mueren en un grave incendio en un local ocupado en Barcelona”, *El País*, 30 de noviembre. Disponible en: <https://elpais.com/espana/catalunya/2021-11-30/cuatro-personas-muertas-en-un-grave-incendio-en-la-plaza-tetuan-de-barcelona.html#?rel=mas>
- Castán, P. (2023): “El talento internacional arraiga en Barcelona, pero la suspende en vivienda, seguridad, fiscalidad y contaminación”, *El Periódico*, 17 de octubre. Disponible en: <https://www.elperiodico.com/es/>

[barcelona/20231017/talento-internacional-arraiga-barcelona-suspende-contaminacion-inseguridad-vivienda-coste-vida-fiscalidad-93427257](#)

- Gans, H. (1990): "Deconstructing the Underclass: The Term's Dangers as a Planning Concept", *Journal of the American Planning Association* 177, pp. 271-77. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/01944369008975772>
- Garland, D. (2005): *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, Barcelona, Gedisa.
- Horvat, N. y Coupechoux, S. (2023): *Eight overview of housing exclusion in Europe*, Fondation Abbé Pierre y FEANTSA. Disponible en: <https://www.feantsa.org/en/report/2023/09/05/report-8th-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2023>
- Levin, J. (2019): "How the 'Welfare Queen' Was Born", *The New York Times*, 18 de Mayo, 2019. Disponible en: https://inside.sfuhs.org/dept/history/US_History_reader/Chapter15/How%20the%20Welfare%20Queen%20Was%20BornThe%20New%20York%20Times.pdf
- Mahía, R. (2018): "Población extranjera residente en España: evolución, características e integración económica", *Anuario CIDOB de la inmigración*, pp. 80-113. Disponible en: https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2018/poblacion_extranjera_residente_en_espana_evolucion_caracteristicas_e_integracion_economica
- Mahía, C. R. y Medina, M. E. (2021): *Informe sobre la integración de la población extranjera en el mercado laboral español*, Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia OBERAXE, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Disponible en: https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0141.htm
- Maillo, G. (coord.) (2019): *VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*, Fundación FOESSA. Disponible en: <https://www.foessa.es/viii-informe/>
- McAuliffe, M. y A. Triandafyllidou (eds.) (2021): *Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022. Organización Internacional para las Migraciones (OIM)*, Ginebra. Disponible en: <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=ES>
- Offe, C. (2008): "Basic income and the labor contract", *Basic income studies*, 3(1), pp. 4-4. Disponible en: <https://doi.org/10.2202/1932-0183.1100>
- Pinzani, A. (2020): "Migración, pobreza y estigma social", *Bajo palabra. Revista de filosofía*, (23), pp. 239-260. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7697427>
- Sales, A. (2014): *El delito de ser pobre: Una gestión neoliberal de la marginalidad*, Barcelona, Icaria editorial.
- Sales, A. (2019): *Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat segons les dades dels equips municipals d'intervenció social a l'espai públic*, Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Disponible en: <https://www.institutmetropoli.cat/wp-content/uploads/2023/02/qui-dorm-al-carrer-a-barcelona.pdf>
- Sales, A. (2022a): "El serveis socials davant l'exclusió residencial", *Quaderns per a la inclusió social*, 8, pp. 45-60. Disponible en: <https://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/503/524/1163>
- Sales, A. (2022b): "El localisme en les polítiques contra el sensellarisme", *Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades*, 11(2), pp. 31-54. Disponible en: https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v11i2.22818
- Serrano, A., y Zurdo, Á. (2013): "Representaciones audiovisuales de las personas sin hogar: entre la espectacularización de la exclusión social extrema y la culpabilización de las víctimas", *Revista Española de Sociología*, (20), pp. 105-137. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4840055>
- Toro, P.A., Tompsett, C.J., Lombardo, S., Philippot, P., Nachtergaeel, H., Galand, B., Schlienz, N., Stammel, N., Yabar, Y., Blume, M., MacKay, L. y Harvey, K. (2007): "Homelessness in Europe and the United States: A comparison of prevalence and public opinion", *Journal of Social Issues*, 63(3), pp. 505-524. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2007.00521.x>
- Verde-Diego, C. (2022): "Revisitando los orígenes del trabajo social: Richmond frente a Addams", *Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 80(156), pp. 81-110. Disponible en: <https://doi.org/10.14422/mis.v80.i156.y2022.006>
- Wacquant, L. (2007): *Los condenados de la ciudad: Gueto, periferias y Estado*, Madrid, Siglo XXI.
- Wacquant, L. (2010): "Crafting the neoliberal state: workfare, prisonfare, and social insecurity", *Sociological forum*, 25(2), pp. 197-220. Disponible en: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=173403>